

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Ana María Correa Blair
DEMANDADO	AFP Protección S.A y COLPENSIONES
PROCEDENCIA	Juzgado 12 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 012 2022 00150 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 260 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Confirma sentencia

En la fecha, **primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al grado jurisdiccional de consulta en favor de **Colpensiones**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Ana María Correa Blair**, en contra de esta entidad y de la **A.F.P. Protección S.A.** Radicado único nacional 050013105 **012 2022 00150** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº. 036**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

Para lo que interesa a esta Sala, atendiendo lo decidido en primera instancia, se tiene que las pretensiones de la actora se orientan a obtener

la declaratoria de ineficacia del traslado efectuado del RPMPD al RAIS a través de la AFP Protección S.A., declarándose válida, vigente y sin solución de continuidad la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, condenándose a Protección S.A., a devolver a Colpensiones, todos y cada uno de los aportes efectuados, incluidos los rendimientos financieros, cuotas de administración y prima de seguros previsionales, y a esta última entidad a recibirlos y reactivar la vinculación. Pide condena en costas para las accionadas.

En sustento de ello afirma que, nació el 23 de octubre de 1969, realizando aportes al extinto ISS entre julio de 1992 y marzo de 1999, para un total de 252.86 semanas; que el 11 de marzo de 1999 se trasladó a Protección S.A., cotizando en dicha entidad 1.097 semanas, para un acumulado en toda la vida laboral de 1.350,72; que al momento de afiliarse al régimen de ahorro individual con solidaridad, no le suministraron una asesoría clara y concreta sobre la edad mínima y el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual, es decir, con qué IBC debía cotizar con el fin de obtener una pensión anticipada o completar el capital para poder acceder a una pensión de vejez, así como tampoco le informaron a qué edad se le redimía el bono pensional, ni la diferencia entre la mesada pensional que recibiría en el RAIS y en el régimen de prima media, y que podía retornar antes de cumplir los 47 años, sin recibir reasesoría antes del arribo a la misma. Afirma que mediante comunicado del 14 de diciembre de 2021, Protección S.A. le informó que a los 57 años tendría una mesada pensional de \$3.045.550,00, mientras que calculada la mesada en el RPMPD con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, el monto ascendería a \$10.858.545,00; que le solicitó a Colpensiones y Protección la ineficacia del traslado, negada por ambas entidades.

En auto del **27 de mayo de 2022, se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, enteradas de la actuación las demandadas allegaron escritos de contestación así:

Colpensiones, acepta lo relativo a la fecha de nacimiento de la actora, la afiliación al régimen de prima media con prestación, las cotizaciones realizadas, el traslado al RAIS, la petición de retorno presentada y la respuesta negativa dada a la misma. Frente a los restantes supuestos esgrimió que no le constan, al ser ajenos a la entidad. **Resistió las pretensiones**, y formuló las excepciones de mérito que denominó: imposibilidad de que Colpensiones decrete la ineficacia del traslado, inexistencia de intereses moratorios, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, y la innominada o genérica.

Protección S.A., admite lo relativo a la data en que nació la señora Ana María, la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad el 11 de marzo de 1999, el contenido del comunicado en el cual le informó a la actora la mesada que recibiría a los 57 años, la solicitud que le fue elevada a fin de admitir el traslado de régimen, y la respuesta negativa, los demás hechos no le constan o no son ciertos, sin embargo, manifiesta que al momento de la vinculación, a la actora se le informó con claridad que el valor de sus cotizaciones en el régimen anterior sería trasladado a Protección S.A a través de un bono pensional, cuya fecha de redención ha sido determinada por el legislador a los 60 años para las mujeres, se informaron sus tipos, modalidades, liquidación, actualización y capitalización hasta fecha de redención y pago del mismo, así como la posibilidad de negociación anticipada. También se dan a conocer las entidades obligadas a su emisión, expedición, reconocimiento y pago en calidad emisores y cuota partistas, teniendo presente que esta información es requerida para realizar las proyecciones pensionales, dado que el bono pensional hace parte del capital para financiar las pensiones en el RAIS.

Recordó que a la actora se le brindó una asesoría integral y completa respecto a todas las implicaciones de su decisión, sin omitir dato alguno, e indicando claramente todas las características, regulaciones del RAIS y su funcionamiento, así mismo los rasgos diferenciadores respecto al RPM, señalando con total claridad que la forma de construir la pensión en uno y otro son distintas y excluyentes, sin que pueda hablarse de situación más ventajosa o desventajosa pues simplemente son regímenes diferentes y excluyentes, correspondiendo al afiliado realizar su propio juicio de favorabilidad de acuerdo a sus condiciones particulares, tal y como lo hizo la demandante. Se **opuso a la prosperidad de las pretensiones** y formuló las **excepciones de mérito** que denominó: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restituciones mutuas en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver cuotas de administración y seguros previsionales, la innominada o genérica, y, falta de juramento estimatorio de perjuicios.

La primera instancia **culminó** con sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito, en la que **declaró** la ineficacia de la afiliación de la señora Ana María Correa Blair al RAIS en el marco de la vinculación a la AFP Protección S.A., entendiéndose para todos los efectos vinculada sin solución de continuidad al RPMCD dirigido por COLPENSIONES. Condenó a la AFP Protección S.A., a que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la decisión, restituya a Colpensiones el saldo de la cuenta de ahorro individua con los rendimientos financieros, así como *"lo descontado por concepto de gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexado con cargo a sus propios recursos. A la par se dispone que, al momento de cumplir la orden, los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y*

demás información relevante que los justifique.” Ordenó a Colpensiones activar la vinculación de la señora Ana María Correa al régimen de prima media, sin solución de continuidad, recibir los valores indicados e integrarlos al fondo común, y que las semanas acreditadas por la AFP se reflejen en la historia laboral. Declaró infundadas las excepciones propuestas, e impuso costas a cargo de Protección S.A., y en favor de la actora, fijando el monto de las agencias en derecho.

La juzgadora, luego de referir la línea de la jurisprudencia especializada sobre el tema de la ineficacia de traslado de régimen pensional, figura bajo la que se debe estudiar el asunto, encontró que al momento del traslado realizado no se le proporcionó al actor información eficaz, oportuna, completa, comprensible, para la toma de su decisión, en la cual se le diera a conocer las alternativas, diferencias entre uno y otro régimen, beneficios, inconvenientes, ventajas y desventajas, el capital que se debía acumular en el régimen de ahorro individual, así como tampoco se le dijo sobre las modalidades de la pensión y la redención anticipada del bono pensional entre otros aspectos, sin que el formulario de afiliación constituya una prueba suficiente para acreditar los supuestos exigidos, por lo que al encontrar establecida la falta al deber de información por parte de la AFP accionada, procedió a la declaratoria de la ineficacia, con las consecuencias y restituciones ya indicadas.

En favor de Colpensiones se conoce en grado jurisdiccional de consulta, en los términos del artículo 69 del C. P. T. y de la S.S. y jurisprudencia especializada.

De la oportunidad para presentar alegaciones hizo uso **Colpensiones**, esgrime que el traslado de la demandante se realizó conforme a la normatividad vigente para el 11 de marzo de 1999, esto es, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, por tal es legal, adicional a que la misma se

encuentra inmersa en la prohibición de retorno establecida en la Ley 797 de 2003, al encontrarse a menos de 10 años para cumplir la edad mínima para pensionarse.

Demandante, insta para que se confirme la sentencia de instancia, en tanto, la AFP privada, al momento de efectuar el traslado inicial de régimen pensional, no le brindó una asesoría clara, completa y eficiente, la cual le permitiera tomar una decisión consiente sobre las implicaciones que en su futuro pensional acarrearía dicho traslado, por lo cual, ante la falta de esa asesoría e información, no puede hablarse que el traslado de régimen pensional se dio de manera libre y voluntaria, así las cosas, al no ser libre y voluntaria la decisión por el desconocimiento de las consecuencias que este le ocasionaría, el mismo se torna ineficaz, tal y como lo indica el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 271.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Atendiendo el recuento realizado, el **problema jurídico** en esta instancia, se contrae a determinar, si procede la ineficacia del traslado de la demandante del RPMPD al RAIS. En el evento de llegarse a la misma conclusión de la quo, se establecerá si es viable su retorno automático al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, con las consecuentes restituciones económicas, y los conceptos que estas comprenden.

Pues bien. Unánime, pacífica y reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos del

traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. En sentencia SL1452 de 2019 dijo:

En relación con la validez del acto de afiliación a cualquiera de los regímenes pensionales, comienza la Sala por precisar, que, como se indicó en sede de casación, conforme el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, «los trabajadores tienen la opción de elegir libre y voluntariamente» el régimen que mejor se ajuste a sus intereses, por cuanto cada uno tiene características disímiles y regladas, sin que en dicha decisión pueda ejercerse con obstrucción o presión alguna de empleador o terceros, so pena de incurrirse en las sanciones del artículo 271 ibídem.

Ahora, como se adoctrinó por la Corte, entre otras, en las sentencias CSJ SL1421-2019 y CSJ SL1688-2019, las AFP, como actores privados en el nuevo sistema de seguridad social, «encargados de la gestión fiduciaria de los ahorros de los afiliados en el RAIS», son quienes desde un principio han estado sometidos a reglamentaciones, restricciones y deberes propios de las actividades que ejecutan, al estar inmersos en la prestación y/o administración de un servicio público de carácter obligatorio, que está bajo la dirección, coordinación y control del Estado, según el artículo 48 de la CN, contexto en el cual, según el numeral 1º del artículo 97 Decreto 663 de 1993, tienen «[...] la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de la información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses». Lo anterior, como una forma de materializar el principio de transparencia en la elección las operaciones y opciones del mercado, y los de prevalencia del interés general y buena fe, de quienes prestan un servicio público.

Y en la SL1689 de 2019 se indica:

(i) Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional, a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional -artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 y demás disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal-. Posteriormente, se agregó a dicho deber la obligación de otorgar asesoría y buen consejo -artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009, Decreto 2241 de 2010- y, finalmente, se impuso la exigencia de doble asesoría -Ley 1748 de 2014, artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015, Circular Externa n.º 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera. Obligaciones que deben ser acatadas en un todo, a fin de que los usuarios del sistema puedan adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional.

(ii) En el campo de la seguridad social, existe un verdadero e ineludible deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-2017), pues dicho procedimiento garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, que el usuario comprende las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen; esto es que, previamente a tal acto, aquel recibió información clara, cierta, comprensible y oportuna. Luego, el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de información.

(iii) La aseveración del afiliado de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarse el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, por cuanto la documentación soporte del traslado debe conservarla en sus archivos, y en tanto es la obligada a observar el deber de brindar información y probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.

(iv) Ni la legislación ni la jurisprudencia establecen que se debe contar con una expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información; de modo que procede sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Luego, acertada resulta la declaratoria de **ineficacia del acto de traslado** dispuesta por la primera instancia, caracterizada porque desde su nacimiento el acto carece de efectos jurídicos, siendo sus consecuencias idénticas a las de la nulidad – vuelta al estado anterior, explicándose por la Sala de Casación Laboral que en estos casos:

... los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJSL1689-2019, CSJSL3464-2019, CSJSL4360-2019 entre otras).

Y en sentencia SL2877-2020, radicación Nro. 78.666, fecha 29 de julio de 2020, frente al tema en concreto de las restituciones económicas, luego de transcribir el artículo 1746 del Código Civil, advirtió:

Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular.

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Subrayado intencional.

En relación con los porcentajes para el fondo de garantía de pensión mínima dijo:

En cuanto a los aportes para financiar la garantía de pensión mínima, es oportuno señalar que el artículo 14 de la Ley 797 de 2003 estableció aportes adicionales sobre el ingreso base de cotización con destino al fondo de solidaridad pensional para financiar la garantía de pensión mínima, para quienes devengaran entre 4 y 16 a 20 salarios mínimos legales mensuales, así como un fondo para el manejo de los mismos –artículo 14 ibídem-.

Pues bien, dicho artículo fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional, a través de sentencia C-797-2004, pero quedaron vigentes los aportes adicionales, de modo que dichos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas, en una subcuenta separada hasta que se cree de nuevo un fondo similar que se encargue de su administración; de hecho, de la subcuenta de cada AFP se financian aquellas prestaciones. Así lo regula el artículo 8.º del Decreto 510 de 2003, hoy compilado en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1833 de 2016. Además, el artículo 7.º del Decreto 3995 de 2008 contempla que cuando se efectúe un traslado de recursos del RAIS al régimen de prima media con prestación definida, debe incluirse la cotización correspondiente para la garantía de pensión mínima.

Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones. Lo que desvirtúa la argumentación del a quo sobre el particular.

Y concluye la Corte:

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima».

Y en sentencia SL 081 de 2021, se reitera:

Como argumento adicional, la Sala debe señalar que la consecuencia derivada de la decisión de ineficacia también aparece que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías... deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones... tal como se dejó sentado, entre otras, en las sentencias CSJ SL17595-2017 y CSJ SL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, y bajo el entendido que la consecuencia es la ineficacia del traslado, en la que se dijo:

Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad.31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrinó:

[...]

"La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

"Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Bajo la misma línea, y en sentencia más reciente SL2271-2022, donde fue demandada Protección S.A., la Corte puntualizó:

*"Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a **devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones**"*

Y en sentencia SL2177-2022, donde estaba vinculada también Protección, adujo:

*"En consecuencia, se adicionará el numeral tercero de la decisión de primera instancia en el sentido de ordenar a la demandada Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., **devolver a Colpensiones las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima**, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, pues tales conceptos, desde el nacimiento del acto ineficaz, debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones.*

*De igual manera, se ordenará a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., **a trasladar a Colpensiones las comisiones y los gastos de administración que fueron cobrados durante todo el tiempo de afiliación de la demandante, así como los valores de las primas de los***

seguros previsionales y el porcentaje de la cotización destinado al fondo de garantía de pensión mínima, los cuales deberá cancelar debidamente indexados, y que deberá asumir con cargo a sus propios recursos.

Posición que ha sido traída hasta la fecha, por lo que acogién dose por esta instancia un argumento de autoridad y acatándose el precedente que en línea mayoritaria sostiene la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, se impone entonces la confirmación de las restituciones ordenadas por la juez primer grado, esto es, los dineros depositados en la cuenta de ahorro individual, junto con los rendimientos financieros y los gastos de administración (que en los términos del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, incluyen además de tal concepto, las primas de seguros y reaseguros al igual que el porcentaje destinado a garantía de pensión mínima), dineros que deben ser reintegrados con cargo a sus propios recursos y debidamente indexados (ver entre otras, sentencias SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021 y SL587-2022).

Los rubros antes mencionados no se encuentran afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción, pues pese a que los mismos no están ligados al reconocimiento de la prestación, si están íntimamente relacionados con la declaratoria de ineficacia, la cual según criterio de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral al ser una pretensión declarativa no se extingue por el paso del tiempo, sumado a que solo en el trámite del proceso es que fue declarada y como consecuencia se dispone su restitución.

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la

sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Ana María Correa Blair**, en contra de la **AFP Protección S.A, y Colpensiones**.

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado